

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: EUR 37/002/2006 (Público)

Servicio de noticias: 209/06

8 de agosto de 2006

<http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR370022006>

Polonia retrocede: No a la reinstauración de la pena de muerte

Amnistía Internacional está profundamente preocupada por las declaraciones del presidente de Polonia, Lech Kaczynski, pronunciadas el 28 de julio de 2006 en las que abogó por la reinstauración de la pena de muerte en Polonia y en toda Europa. Kaczynski argumentó en la primera emisora de la radio pública polaca que "los países que abolen esta pena conceden una extraordinaria ventaja al delincuente en detrimento de la víctima: la ventaja de la vida frente a la muerte". Sin embargo, toda sociedad que recurre a la pena de muerte devalúa la vida humana y se arriesga a igualarse moralmente con el asesino. El sistema judicial no debe repetir el delito del perpetrador.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, ya que se trata de una violación de los derechos humanos fundamentales (el **derecho a la vida** y el **derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes**) y advierte de su carácter **irrevocable** y de la **posibilidad de que se aplique a inocentes**, mientras que **nunca se ha demostrado que sea más efectiva que otras penas a la hora de disuadir de futuros delitos**. Estos derechos están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y en legislaciones y Constituciones nacionales.

En Europa, la tendencia a la abolición es especialmente notable. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa exige ahora, como **condición de acceso a la organización**, el compromiso de abolir la pena capital, y la Unión Europea ha adoptado importantes normas destinadas a promover la abolición en los Estados que no son miembros de la UE. En la cumbre del Consejo de Europa de octubre de 1997, los jefes de gobierno, incluidos los de todos los Estados miembros de la UE en ese momento y los de los nuevos Estados miembros, pidieron la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Polonia la abolió en 1997, tras una suspensión de las ejecuciones impuesta en 1988.

La abolición de la pena de muerte es actualmente un requisito para que un Estado sea miembro de la UE. Este compromiso de la UE se afianzó en diciembre de 2000, en la cumbre de Niza del Consejo Europeo, con la solemne proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En ella, se insiste en el derecho de toda persona a la vida y en la prohibición de la pena de muerte (artículo II-2). Todos los Estados miembros de la UE, así como los países candidatos, se han adherido al Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte. Además, todos los Estados miembros de la UE han firmado el Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, y adoptado en

mayo de 2002 en la ciudad de Vilna. En este tratado se prohíbe explícitamente la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso en tiempos de guerra.

Un Estado está obligado, de conformidad con el derecho internacional, a respetar las disposiciones de los tratados en los que es Estado Parte, y a no hacer nada que menoscabe el objeto y propósito de los tratados que ha firmado.

Según la información más reciente de la que dispone Amnistía Internacional, **125** países, es decir, más de la mitad de los que existen en todo el mundo, han abolido la pena de muerte, ya sea mediante la aprobación de leyes o en la práctica. Desde 1990, más de **40** países la han abolido para todos los delitos, entre ellos Polonia, y una vez abolida, es muy poco frecuente que se vuelva a instaurar. De hecho, durante ese mismo periodo, solo **cuatro** países abolicionistas reinstauraron la pena capital, y **dos** de ellos (Nepal y Filipinas) la han vuelto a abolir.

El 2 de agosto, la Liga de las Familias Polacas (Liga Polskich Rodzin, LPR), partido minoritario en la coalición que gobierna Polonia, anunció una campaña a escala europea en favor de la reinstauración de la pena de muerte y un referéndum sobre la misma cuestión en Polonia. El vicepresidente de la Liga, Wojciech Wierzejski, calificó de "anacrónica" la prohibición de la pena de muerte en los 25 Estados miembros de la UE.

Sin embargo, no es lícito ampararse en la opinión pública para justificar violaciones de los derechos humanos. De hecho, muchas violaciones de los derechos humanos han sido bien acogidas por la opinión pública, como los linchamientos en Estados Unidos y las masacres de Ruanda. Las autoridades polacas deben liderar la lucha en favor de los derechos humanos, y no hacer creer a la población que la pena de muerte es útil para un fin determinado.

El 3 de agosto, en respuesta a estas declaraciones, Stefaan de Rynck, portavoz de la Comisión Europea, afirmó en representación de la UE que "la pena de muerte no es compatible con los valores europeos". Las Directrices de la Política de la Unión Europea hacia Terceros Países sobre la Pena de Muerte establecen que la abolición de la pena de muerte contribuye a reforzar la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos. Según estas directrices, la UE tiene como objetivo trabajar para conseguir la abolición universal de la pena de muerte como una política sólidamente defendida y compartida por todos los Estados miembros de la UE.

Dado que Polonia es también un Estado miembro del Consejo de Europa, René van der Linden, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se dirigió en los siguientes términos al presidente Kaczynski en una carta abierta: "En nuestra opinión, la pena de muerte no tiene lugar en el sistema de justicia penal de un país moderno y civilizado". A continuación, añadía, "el hecho de sugerir que su reinstauración podría representar, en algún caso, un avance, constituiría un ataque frontal contra nuestros valores comunes, que se basan en el respeto a la dignidad humana básica de cada persona".

De igual modo, Amnistía Internacional insta a las autoridades polacas a respetar sus obligaciones internacionales y a mantener su compromiso con respecto a la abolición de la pena de muerte.